



SE REQUIEREN POLÍTICAS RESPONSABLES DE LAS IFI EN UNA ECONOMÍA GLOBAL CADA VEZ MÁS INESTABLE

**Declaración de la Agrupación Global Unions a las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial en 2018
Washington, 20-22 de abril de 2018**

Introducción

1. Las últimas previsiones de las instituciones financieras internacionales prevén un segundo año de crecimiento económico más fuerte, luego de más de media década de una anémica recuperación tras las Gran Recesión. La declaración de la Agrupación Global Unions¹ observa que el crecimiento está compartido de forma desigual y prácticamente no ha tenido ningún impacto positivo en los mercados de trabajo en muchas de las regiones del mundo, tal como demuestra el declive de la participación del trabajo en la renta nacional. La declaración expresa la preocupación del movimiento sindical por el hecho de que el endurecimiento de la política monetaria, las reformas fiscales que ocasionan desigualdad, las restricciones comerciales unilaterales y los intentos de regresión en cuanto a la regulación financiera, podrían desestabilizar la economía mundial y perjudicar los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Los sindicatos están además preocupados por la creciente amenaza que suponen el populismo de extrema derecha, el autoritarismo, la catástrofe climática y la desigualdad, problemas que avivan las llamas de conflictos. La Agrupación Global Unions insta a las instituciones financieras internacionales a centrarse en la creación de empleos de calidad, garantizar salarios vitales, ampliar la protección social universal, una transición justa hacia un futuro con bajas emisiones de carbono, reducir las desigualdades y apoyar el diálogo social.

2. La declaración de la Agrupación Global Unions propone recomendaciones en respuesta a distintas iniciativas políticas de las IFI, incluyendo la revisión por parte del FMI de su implicación en reformas de protección social; las acciones del FMI y el Banco Mundial en relación con la desigualdad de ingresos y riqueza; y el apoyo anunciado por el Banco a estrategias de transición justa hacia economías con bajas emisiones de carbono. La declaración insta al Banco Mundial a adoptar un enfoque más apoyado en principios respecto a la implicación del sector privado en las estrategias de desarrollo de la institución, que reconozca plenamente los costos y riesgos asociados. Incluye asimismo recomendaciones para asegurar la aplicación efectiva del nuevo requisito crediticio respecto a normas laborales del Banco, cuya entrada en vigor está prevista para finales de 2018.

¹ La Agrupación Global Unions está integrada por la Confederación Sindical Internacional (CSI), que cuenta con 207 millones de miembros en 163 países; las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI), que representan a sus respectivos sectores a nivel sindical internacional (AIAE, FIP, ICM, IE, IndustriALL, ISP, ITF, UITA y UNI); y la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC).

Acciones políticas disruptivas amenazan un crecimiento económico más fuerte

3. Las IFI prevén que continuará en 2018 el crecimiento global más fuerte registrado en 2017, en comparación con los seis años anteriores, según las últimas previsiones publicadas por el FMI y el Banco Mundial. La Organización Internacional del Trabajo, en su informe de 2018 sobre *Perspectivas sociales y del empleo en el mundo*, prevé que la tasa de desempleo mundial experimente un leve descenso como resultado de ello, pero la mayoría de los progresos se registrarán en economías avanzadas. El crecimiento del empleo se verá superado por el crecimiento de la fuerza de trabajo en las economías en desarrollo y emergentes. El empleo precario, combinado con unos salarios reales estancados o en descenso en muchas regiones, implican que cerca de 290 millones de personas seguirán estando en situación de extrema pobreza, según cálculos de la OIT. En los países en desarrollo, esta situación afecta al 40 por ciento de los trabajadores y trabajadoras.

4. La tasa de crecimiento prevista para este año, la mayor desde el período inmediatamente posterior a la Gran Recesión, no estará compartido equitativamente en todo el mundo. La mayoría de los países con una fuerte dependencia en las exportaciones de materias primas, por ejemplo, registrarían un crecimiento económico más lento en 2018, equivalente a menos de la mitad de la media mundial del 3,9 por ciento que prevé el FMI. Países del G20, como Brasil, Rusia y Sudáfrica, figuran entre aquellos que registran un débil crecimiento del PIB, que puede verse reflejado en la continuación de elevadas tasas de desempleo y subempleo. También se prevé un crecimiento considerablemente inferior a la media mundial para algunas grandes economías avanzadas, particularmente Gran Bretaña y Japón.

5. El movimiento sindical internacional está profundamente preocupado por el hecho de que las actuales decisiones sobre política económica estuvieran sembrando las semillas de la próxima recesión mundial y pudieran reforzar sus repercusiones. Por ejemplo, la reforma fiscal introducida en la segunda mayor economía mundial, Estados Unidos, consistente en recortes de las tasas impositivas aplicadas a las empresas y los contribuyentes con ingresos más altos, vendrá a incrementar aún más la desigualdad de ingresos y a comprometer el crecimiento económico y la estabilidad a medio plazo, aunque tenga un efecto de ligero estímulo a corto plazo. Otra consecuencia más inmediata será el consiguiente endurecimiento de la política monetaria, que ya se ha iniciado en EE.UU. y que repercutirá en un incremento de los costos de financiación de préstamos y del servicio de la deuda en todo el mundo. El resultado inevitable será un descenso en las inversiones. El incremento de los costos supone un peligro particular para los países en desarrollo cuya carga de endeudamiento resulta prácticamente insostenible y que podrían verse sumidos en una severa crisis económica y financiera. De acuerdo con un documento del FMI publicado en marzo, 40 por ciento de los países de bajos ingresos corren un alto riesgo de atravesar o atraviesan ya problemas de deuda, frente al 20 por ciento hace cuatro años.

6. Igual de preocupante para los trabajadores y trabajadoras es la amenaza de una avalancha de restricciones comerciales unilaterales y disruptivas. Los sindicatos defienden, más bien, una renegociación de los acuerdos internacionales sobre comercio e inversión, que ignoran los costos de ajuste que supone la liberalización y dan prioridad a los derechos de los inversores por encima de los intereses de la comunidad y los trabajadores. Las medidas adoptadas en ciertos países con vistas a eliminar los marcos regulatorios para el sector financiero, establecidos tras la crisis financiera de 2008, son igualmente preocupantes. Estas acciones no sólo ponen en peligro el empleo y contribuyen a una nueva recesión global, sino que además harían que los Gobiernos sean incapaces de responder de manera rápida y efectiva frente a la próxima crisis. Una integración justa y efectiva de los migrantes y refugiados en los mercados de trabajo es también una preocupación clave, dado que estas poblaciones suelen ser vulnerables al desempleo, a tener empleos precarios y a la exclusión social. Las recomendaciones de la Agrupación Global Unions para responder a estos desafíos figuran en la última sección de la presente declaración.

Se requiere el apoyo de las IFI para lograr la protección social universal

7. Acogemos favorablemente la decisión del FMI desarrollar una nueva “visión institucional” sobre la protección social, tras completar un proceso de estudio y consultas. La revisión de la política se iniciaría tras la publicación el año pasado de un informe de Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del Fondo (“*El FMI y la Protección Social*”, julio de 2017), cuestionando si la implicación del Fondo en reformas de la protección social era compatible con su apoyo a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El informe indicaba la falta de experiencia del personal del Fondo respecto a temas relacionados con la protección social, en comparación con otras organizaciones más especializadas en la materia. El Informe de la OEI apunta a que el enfoque del FMI de favorecer la protección social focalizada, en lugar de una protección social universal, en general no concuerda con el de otras agencias internacionales y con los ODS. Los sindicatos y otras organizaciones han criticado a menudo la implicación del FMI en las reformas de programas sociales debido a que se han centrado en controlar los costos fiscales a corto plazo, más que en mejorar su adecuación o cobertura.

8. La promoción por parte del FMI de una estricta focalización de beneficios sociales, utilizando mecanismos cuestionables que excluyen a un número considerable de los más vulnerables, ha sido uno de los principales temas de preocupación. Las medidas promulgadas por el Fondo han incluido focalizar la asignación de subsidios familiares que anteriormente eran universales; eliminar subvenciones alimentarias universales; y restricciones en el acceso a prestaciones de jubilación y desempleo, que han derivado en una cobertura reducida. Los programas de asistencia social para los más necesitados deberían formar parte de sistemas de protección social integrales, en línea con la Recomendación 202 de la OIT sobre los Pisos de Protección Social. Sin embargo, el enfoque adoptado por el FMI, de apoyar unas redes de seguridad social estrechamente focalizadas dejando de lado sistemas integrales resulta muy problemático. Tomando en cuenta que el proceso de revisión del Fondo podría durar casi dos años —está previsto que publique una nota de orientación para el personal sobre protección social a finales de 2019— la Agrupación Global Unions recomienda que el FMI se abstenga de condicionar los préstamos o de efectuar recomendaciones de reforma en cuanto a la protección social, al menos hasta que se haya completado el citado proceso.

9. En 2016 la OIT y el Banco Mundial lanzaron la Alianza Mundial para la Protección Social Universal, un esfuerzo conjunto de distintas organizaciones internacionales, asociados en el desarrollo y organizaciones de la sociedad civil, para incrementar el número de países que cuentan con una protección social universal. La participación del Banco en esta iniciativa se sitúa en línea con su respaldo a los ODS y específicamente la meta 1.3 sobre protección social para todos. En vista de que en los últimos años ha estado involucrado en varios sistemas problemáticos de protección focalizada en base a la comprobación de medios económicos, el Banco debería asegurarse de que en adelante sus programas cumplan la promesa de protección para todos, contribuyendo a establecer sistemas integrales, en línea con la Recomendación 202 de la OIT. El FMI debería igualmente apoyar este enfoque, dando continuidad a la labor de investigación a nivel nacional en la que estuvo involucrado, con vistas a identificar espacio fiscal para los pisos de protección social.

Condicionalidad y recomendaciones de políticas para reducir la desigualdad

10. En este último año, se consultó con las centrales sindicales nacionales de distintos países en iniciativas piloto del FMI sobre los temas de la desigualdad de ingresos y riqueza, que se llevarían a cabo como parte de las consultas del Artículo IV. La Agrupación Global Unions apoya la ampliación de este diálogo y las intenciones del FMI de generalizar y hacer operativo su trabajo sobre la desigualdad. El proceso de hacer operativos sus análisis respecto a la desigualdad requerirá voluntad para evaluar de manera honesta los efectos distributivos y respecto al género que tienen las reformas recomendadas por el Fondo. Deberían realizarse análisis similares sistemáticos en los programas crediticios del FMI y usarlos para orientar la condicionalidad.

11. Este enfoque resulta particularmente necesario respecto a la política salarial y la masa salarial del personal en el sector público, donde el FMI a menudo promueve una limitación del aumento salarial y la reducción del sector público. Ese tipo de acciones puede tener importantes repercusiones sobre la igualdad. Ha de prestarse también especial atención al impacto de los cambios en los sistemas de negociación colectiva, como por ejemplo enmiendas legislativas que disminuyan el acceso a la negociación colectiva y la promoción de negociación descentralizada. Esta última inevitablemente conduce a una menor cobertura de los convenios colectivos y debería reconsiderarse de inmediato. En cuanto a la igualdad económica, el FMI debería centrarse en las cuestiones cruciales, como son la menor participación del trabajo en la renta nacional y la brecha cada vez más profunda entre los más ricos y la mayoría de la población. En cuanto a la igualdad de género, tendría que prestarse también especial atención a la seguridad económica de las mujeres y las repercusiones de las políticas fiscales y sobre gasto público.

12. El Banco Mundial puede ayudar a los países a reducir la desigualdad proporcionando asesoramiento efectivo para la creación de trabajo decente por medio de políticas del mercado de trabajo y una transición de la economía informal a la formal. La publicación del Banco *Balancing Regulations to Promote Jobs* es una guía para la adopción de una política del mercado de trabajo que puede ayudar a hacer frente a los problemas del mundo del trabajo que contribuyen a crear desigualdad, incluyendo el estancamiento salarial y el empleo atípico. El informe pone especial énfasis en la importancia de los salarios mínimos y de medidas para prevenir el abuso de contratos de trabajo precarios, además de recalcar la importancia del diálogo social y el tripartismo en la planificación de las reformas de la legislación laboral. Incluye además múltiples referencias a normas e instrumentos de la OIT. El Banco todavía puede elaborar más en profundidad su análisis sobre la transición a la formalidad, susceptible de sacar a las personas de la pobreza accediendo a un empleo seguro y productivo, con lo que se contribuye a reducir la desigualdad. Tanto el FMI como el Banco Mundial deben ofrecer un firme apoyo a medidas que refuercen las instituciones del mercado de trabajo, promuevan la negociación colectiva y contribuyan a incrementar los salarios reales, para recuperar así parte de la contribución del trabajo a la renta nacional.

El futuro del trabajo y las finanzas

13. Hace falta un nuevo contrato social para realizar los ODS y mantener la cohesión social en un momento de cambios importantes incluyendo la introducción de nueva tecnología, automatización y la revolución digital. Actuando ahora para promover un empleo seguro, una prosperidad compartida, protección social y derechos de los trabajadores/as se conseguirá mayor resiliencia garantizando una transición fluida hacia el futuro del trabajo. El Banco Mundial podría señalar el camino a seguir con su próximo *Informe sobre el desarrollo mundial 2019: La naturaleza cambiante del trabajo*. Un informe concebido con aportaciones de los interlocutores sociales podría representar un recurso sobre políticas con vistas a un futuro del trabajo decente. No obstante, el equipo del IDM ha declinado hasta la fecha las solicitudes para reunirse con los sindicatos, indicando únicamente la posibilidad de consultas tras finalizar el “borrador amarillo”. El actual borrador del informe incluye algunas recomendaciones positivas a favor de una mayor inversión pública en las personas, así como fiscalización digital y del carbono. No obstante, su llamamiento a un “Nuevo Contrato Social” que implicaría una mayor flexibilización del mercado de trabajo, más empleo inseguro a través de plataformas digitales y el desplazamiento de la voz de los trabajadores de las estructuras de diálogo social, ocasionaría una mayor dislocación, inestabilidad y desigualdad.

14. Pese a haberse obtenido progresos en algunos países hacia una re-regulación del sector financiero tras la desastrosa crisis financiera mundial en 2008, dista mucho de ser completa. En relación con importantes áreas del sector, como los sistemas bancarios en la sombra, sigue habiendo muy poca o ninguna regulación. Y pese a que tanto el FMI como otras instituciones han revelado que la tributación del sector financiero continúa siendo

excesivamente baja en comparación con la economía real, las cargas impositivas sobre las finanzas incluso se han reducido en algunos países. El surgimiento de criptomonedas no reguladas –que pueden utilizarse como vehículo para el blanqueo de dinero y la evasión fiscal además de crear nuevas fuentes de inestabilidad y destrucción de empleos– ha venido a sumarse a la mezcla explosiva. Información publicada en marzo, revelando que las bonificaciones en Wall Street alcanzaron en 2017 el nivel más alto en 11 años, vienen a indicar que las firmas financieras han retomado su imprudente cultura de antes de la crisis. Muchas de estas bonificaciones representan una retribución por haber convencido a empresas fuertemente endeudadas a asumir una deuda aún mayor. Estas peligrosas prácticas financieras, combinadas con recientes acciones en ciertos países para revertir las regulaciones y la supervisión instauradas tras la crisis de 2008, están creando las condiciones para el estallido de una nueva crisis. Las IFI deben hacer uso de su influencia para poner fin al retroceso en cuanto a la regulación financiera y en cambio completar los pasos ya emprendidos para prevenir una nueva crisis.

Un enfoque responsable y realista a la implicación del sector privado en el desarrollo

15. La visión del Banco Mundial respecto al desarrollo liderado por el sector privado implica considerables riesgos y supone una divergencia de sus funciones y su misión centrales. La Agrupación Global Unions insta a que se adopte un enfoque prudente y un compromiso hacia el crecimiento inclusivo, en beneficio de los pobres y los trabajadores y trabajadoras.

16. El enfoque en cascada, ahora denominado “Maximizar el financiamiento para el desarrollo”, situaría al Grupo del Banco Mundial como facilitador de capital privado y prestamista de último recurso. A través del Foro Mundial de Infraestructura, el Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo están presionando para conseguir una ambiciosa ampliación de las asociaciones público-privadas y la infraestructura como una categoría de activos para los inversores institucionales. Como resultado de ello, ha aumentado la atención hacia garantías para la inversión privada y el diseño de proyectos que resulten rentables, y por tanto atractivos para los inversores. La Asociación Internacional de Fomento, entidad del Banco Mundial que presta ayuda a los países más pobres, emitirá por primera vez en su historia bonos respaldados por contribuciones de los Gobiernos. La ronda de reposición de recursos AIF18 creó además un Servicio de Financiamiento para el Sector Privado (SFSP) con objeto de canalizar fondos a través de las agencias del Banco que se ocupan del sector privado, IFC y MIGA, para impulsar sus operaciones por medio de la mitigación de riesgos, aportación de garantías, una facilidad en moneda nacional y un mecanismo de financiamiento combinado.

17. La emisión de bonos de la AIF debería realizarse de manera limitada y bajo un estricto control, para evitar fluctuaciones en los mercados de capital privado y que la necesidad de reembolsar los bonos pudiera poner en peligro la capacidad de la AIF para otorgar créditos y donaciones en condiciones concesionarias a los países de bajos ingresos. El SFSP plantea ciertas inquietudes respecto al uso de fondos de la AIF en beneficio de inversores privados y garantizando la obtención de ganancias. Las APP, que combinan fondos públicos y operación privada, constituyen ya un enfoque peligroso, con un historial demostrado de crear cargas de deuda oculta sobre los Gobiernos. Intensificando la financiación privada aumentará la necesidad de obtener ingresos a través de la imposición de cuotas a los usuarios, perjudicando el acceso y los potenciales beneficios.

18. Debe tenerse especial cuidado respecto a la financiarización de proyectos de infraestructura y su vinculación como vehículos de inversión. Este enfoque podría conducir a una evaluación inadecuada de los riesgos y derivar en comportamiento imprudente, suponiendo una amenaza a la estabilidad financiera mundial. Desde el estallido de la crisis financiera mundial, el crecimiento de las finanzas privadas se ha disociado de la creación de empleo y la economía real, fomentando por tanto desigualdades. Una inversión pública responsable ha demostrado ser la mejor vía para obtener infraestructuras sostenibles, crecimiento del empleo y prosperidad compartida. El Banco Mundial no debería dejar de lado este papel y convertirse en un

instrumento para sobreproteger el capital privado. La co-financiación privada puede desempeñar un papel en el desarrollo, pero el Banco ha de asegurarse de que los proyectos apoyen su doble objetivo de eliminar la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida, estén en línea con las salvaguardias medioambientales y sociales y los inversores asuman la parte que les corresponda de los riesgos.

19. La aportación privada de servicios públicos y su privatización siguen siendo un problema, especialmente en sanidad y educación. Incluso el *Informe sobre el desarrollo mundial 2018* consagrado a la educación –que incluye inquietantes argumentos sobre los docentes, las pruebas y la financiación– adoptó un enfoque moderado respecto a la educación privada, aduciendo que la tecnología debe utilizarse para reforzar, no para sustituir, la relación docente-estudiante. El IDM no encontró ninguna “prueba fehaciente de que las escuelas privadas consigan mejores resultados de aprendizaje que las escuelas públicas”, señala que la aplicación de una regulación apropiada podría resultar más difícil en la educación privada que en una educación pública de calidad, y concluyó que “los países deben asegurarse de que la escolarización privada no perjudique el aprendizaje para todos”.

20. No obstante, las academias de *Bridge International*, respaldadas por la IFC, cobran tasas en los países en desarrollo a cambio de una educación privada impartida por docentes no cualificados que se limitan a seguir en tabletas el guion marcado como parte de un plan de estudios mediocre. Esto supone un flaco servicio a las familias que se ven obligadas a destinar sus limitados recursos a pagar las tasas escolares, a los estudiantes a quienes se deniega una educación de calidad y a los docentes que resultan perjudicados por la desprofesionalización. Tal como indica el IDM 2018: “Los proveedores privados podrían intentar aprovecharse [de las familias] para obtener mayores beneficios o alcanzar sus otros objetivos”. Las IFI y los Gobiernos tienen que desempeñar un papel activo para garantizar un comportamiento responsable por parte del sector privado y no deberían dejar el desarrollo o los servicios públicos en manos de actores que sólo busquen obtener beneficios.

Transición justa para los trabajadores y diálogo social para una economía sostenible

21. La Agrupación Global Unions acogió con beneplácito el anuncio en diciembre de que el Banco Mundial y el Gobierno canadiense trabajarán junto con la Confederación Sindical Internacional en relación con la transición justa hacia economías con bajas emisiones de carbono en países en desarrollo y pequeños Estados insulares. La colaboración anunciada, con el apoyo de Canadá, se centra en la transición de la electricidad alimentada con carbón a una energía limpia. La CSI y el Centro de Transición Justa, que agrupa a sindicatos y otras organizaciones, pueden contribuir aportando numerosos ejemplos de buenas prácticas e información. Nos complace trabajar junto con el Banco Mundial y el Gobierno canadiense, y esperamos poder llegar a un acuerdo rápidamente para que el programa anunciado empiece a ser operativo.

22. Los trabajadores y trabajadoras deben tener un sitio en la mesa de negociación para el diseño de las estrategias nacionales sobre energía y sostenibilidad. Si no tiene lugar una transición justa para los trabajadores en industrias con combustibles fósiles y no se crea empleo en la transferencia hacia una economía baja en carbono, la cohesión social resultará aún más dañada y la desigualdad se verá exacerbada. La Agrupación Global Unions alienta al Banco Mundial a apoyar procesos tripartitos y diálogo social en relación con la transición justa. Esto vendría a reforzar el compromiso existente del Banco Mundial respecto a los cambios económicos y la reducción de emisiones, como la coalición para las contribuciones determinadas a nivel nacional.

23. La protección social universal es la piedra angular de la resiliencia ante el cambio climático y una transición justa para los trabajadores/as. Las IFI deberían apoyar el reforzamiento de los sistemas de protección social, prestando especial atención al impacto del cambio climático. De manera inmediata, se necesita que el FMI haga más por proteger a los asalariados con ingresos

bajos y medios frente a los cambios en los subsidios a los combustibles, particularmente en países como Egipto que están registrando una elevada inflación como resultado de las reformas a los programas gubernamentales.

Cooperación para implementar la salvaguardia laboral del Banco Mundial

24. A finales de 2018, el Banco Mundial tiene previsto sumarse a varios otros bancos multilaterales de desarrollo que, en los últimos años, han adoptado y aplicado ambiciosos requisitos crediticios o salvaguardias en relación con las normas del trabajo. “La Norma Ambiental y Social 2: Mano de obra y condiciones de trabajo” (NAS 2) forma parte del nuevo *Marco Ambiental y Social*, adoptado por el Banco en agosto de 2016. NAS 2 establece requisitos básicos de salud y seguridad en el trabajo, la obligación de facilitar información a los trabajadores y el requisito de respetar ciertos derechos fundamentales de los trabajadores.

25. La introducción por parte del Banco Mundial de una salvaguardia laboral es un paso importante, pero su eficacia podría verse reducida por el hecho de que en algunos aspectos esa versión es más débil que las de otros BMD. Para evitar que las deficiencias o las ambigüedades existentes en la NAS 2 pudieran revertir en tolerancia hacia prácticas laborales inaceptables o denegación de los derechos de los trabajadores en actividades financiadas por el Banco, resulta imperativo que el Banco coopere estrechamente con la OIT y los sindicatos, que son las partes más informadas sobre las condiciones laborales en sus proyectos y programas. En diciembre, la Agrupación Global Unions remitió al Banco Mundial una serie de recomendaciones detalladas respecto a una futura Nota de Orientación en relación con la implementación de la NAS 2.

26. El Banco debería mejorar su cooperación con los sindicatos y la OIT cuando desarrolle programas de formación, mecanismos de control y procedimientos de consultas para la implementación de la NAS 2. El Banco debería asimismo examinar posibilidades de trabajar conjuntamente con otros BMD que tienen años de experiencia previa en la implementación de salvaguardias laborales. El trabajo conjunto podría tener lugar, por ejemplo, en la formación de personal y directores de proyectos sobre los requisitos sobre normas del trabajo, y en el establecimiento de procedimientos efectivos de supervisión y compilación de información para identificar riesgos de violaciones de la salvaguardia. Debería alentarse a otros BMD que todavía no hayan adoptado una salvaguardia laboral para que lo hagan. Entre los bancos regionales establecidos de larga data, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo todavía no se han sumado a sus homólogos para la adopción de requisitos obligatorios para que sus actividades respeten los derechos fundamentales en el trabajo.

Recomendaciones de la Agrupación Global Unions

Medidas para apoyar una prosperidad compartida y el trabajo decente

27. El FMI y el Banco Mundial deberían

- Asegurarse de que todas sus operaciones contribuyan a reducir las desigualdades, evaluando el posible efecto de su asesoramiento político, créditos y condicionalidad respecto a la igualdad económica y de género. Apoyar una prosperidad compartida y la recuperación de la pérdida de participación del trabajo en la renta nacional, promoviendo salarios mínimos vitales y la negociación colectiva. Poner fin a la promoción de la desregulación del mercado de trabajo y la supresión de salarios, incluso a través de la condicionalidad a la financiación. En su lugar, fomentar el diálogo social, una amplia cobertura de los convenios colectivos y el reforzamiento de las instituciones del mercado de trabajo.
- Contribuir a reforzar la capacidad de la administración pública y la inversión pública en servicios de calidad e infraestructura sostenible.

- Ayudar a los países a establecer políticas fiscales que reduzcan la desigualdad y promuevan la protección social universal por medio de regímenes fiscales más progresivos, medidas para combatir la evasión fiscal, y la tarificación del carbono.
- Apoyar una transición justa para los trabajadores/as y comunidades afectados por la transformación hacia una economía con bajas emisiones en carbono. Promover el diálogo social tripartito, la protección social y el trabajo decente para permitir y llevar a cabo una transición justa.
- Apoyar la inclusión, en los acuerdos comerciales y de inversión, de disposiciones laborales vinculantes basadas en las normas de la OIT, y derogar los mecanismos de solución de conflictos inversor-Estado que socavan el derecho de los Gobiernos a regular.

28. El Banco Mundial debería

- Asegurarse de que proyectos y programas respeten los derechos fundamentales de los trabajadores/as y proporcionen condiciones de trabajo seguras y salarios adecuados. Trabajar conjuntamente con los sindicatos y la OIT en la implementación de su “Norma Ambiental y Social 2: Mano de obra y condiciones de trabajo” para asegurarse de que todas las actividades financiadas por el Banco guarden conformidad con las normas del trabajo reconocidas internacionalmente, incluyendo la identificación de proyectos con alto riesgo de incumplimiento y el control del cumplimiento.
- Examinar posibilidades de trabajar conjuntamente con otros BMD que han adoptado ya salvaguardias laborales, para su implementación, por ejemplo en actividades de formación y para establecer procedimientos efectivos de supervisión.
- Evitar que se produzca una reorientación de las funciones del Banco Mundial mediante la implicación privada en el desarrollo y gestionar con cautela el recurso a APP, inversión privada y recaudación de fondos a través de los mercados de capital. El Banco debería asegurarse de que la participación privada sea responsable y no ponga en peligro el doble objetivo del Banco, los servicios públicos, los objetivos de desarrollo nacionales o la misión de la Asociación Internacional de Fomento.

Medidas para una regulación financiera y una fiscalidad efectivas

29. El FMI debería

- Abstenerse de establecer condiciones crediticias o recomendaciones sobre políticas en el área de la protección social en tanto no finalice la nueva visión institucional del Fondo. Reconsiderar las condiciones crediticias y recomendaciones sobre políticas que comprometan el trabajo decente o exacerben la desigualdad.
- Apoyar la ampliación y realización, y oponerse a cualquier marcha atrás, de las medidas adoptadas desde 2008 para corregir la falta de regulación del sector financiero, incluyendo los sistemas bancarios en la sombra, los grupos demasiado grandes para quebrar, y el bajo nivel de imposición del sector financiero.
- Apoyar un proceso que conduzca a un acuerdo internacional para la regulación coordinada de las criptomonedas.
- Apoyar la creación de un marco multilateral para la negociación de acuerdos internacionales vinculantes para la restructuración de la deuda cuando los países se enfrenten a una deuda soberana insostenible.

- Promover medidas más firmes para contrarrestar la erosión de las bases impositivas e introducir una reforma de los sistemas fiscales, a fin de lograr una base más amplia y una fiscalidad más progresiva, y para transferir la carga impositiva del empleo a las actividades no productivas y que destruyen el medio ambiente, incluyendo una tarificación del carbono.
- Fomentar medidas más firmes para asegurar que los ingresos no se pierdan en paraísos fiscales, exigiendo el intercambio automático de datos e información entre países, y acciones para poner fin a la erosión de la base impositiva y la transferencia de beneficios por parte de las empresas multinacionales.
- Apoyar la introducción de impuestos sobre las transacciones financieras para desalentar el comportamiento especulativo y crear nuevas fuentes de financiación.

02-04-18